

El INE en 2018-2022. Desempeño y ofensiva gubernamental en su contra.

Pablo Xavier Becerra Chávez

Profesor de Tiempo completo, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Ciudad de México.

Correo: pablojbch@yahoo.com.mx

Propuesta de ponencia para el *XXXIII Congreso Internacional de Estudios Electorales: América Latina y el Caribe, elecciones y virajes políticos*.

Resumen. El Instituto Nacional Electoral es el organismo electoral integrado en 2014, como sucesor del Instituto Federal Electoral, formado en 1990, que se constituyó en el centro de la democratización de México por medio de la organización de elecciones libres, correctas y competidas. El IFE organizó las elecciones federales entre 1991 y 2012, caracterizadas por dos alternancias en la presidencia de la república (2000 y 2012). Su sucesor, el INE ha organizado las elecciones federales de 2015, 2018 y 2021, así como ha participado en las elecciones locales desde 2015 hasta 2022, como resultado del modelo de colaboración entre el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). El saldo ha sido la tercera alternancia en la presidencia (2018) y la sucesión de alternancias en las gubernaturas y la mayor parte de los gobiernos municipales. Además, el INE ha organizado una consulta popular, inmediatamente después de las elecciones de 2021, y una revocación del mandato con un presupuesto disminuido en 2022.

Durante este periodo el presidente de la república y su partido han desarrollado una ofensiva contra el INE, que ha incluido la amenaza de someter a sus consejeros a juicio político así como demandarlos penalmente, y que ha culminado en la iniciativa de reforma electoral presentada ante la cámara de diputados el 28 de abril del presente año, que plantea modificar sustancialmente el modelo de organización del INE, al cual ahora llamaría Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) por medio de la elección popular de los consejeros electorales, la desaparición de los OPLEs y los tribunales electorales locales, eliminación del financiamiento público ordinario y mantenimiento exclusivo del financiamiento electoral, reducción de los tiempos destinados a fines político-electorales, así como otros cambios en otras áreas del sistema electoral. La hipótesis del trabajo es que con esa iniciativa de reforma el gobierno federal se propone controlar al organismo electoral con la finalidad de que su partido se mantenga en el poder.